

Santiago, veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro.

**VISTOS:**

En causa **RUC 2200070331-5, RIT N° 514-2024**, el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de tres de julio de dos mil veinticuatro, condenó al acusado, **Kevin Edgar Olivares Reyes**, a sendas penas de **quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio y multa de 10 unidades tributarias mensuales**, más accesorias legales, por su responsabilidad como autor del delito de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas y; **cuatro años y un día** de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales, por su responsabilidad en calidad de autor del delito de porte o tenencia ilegal de arma de fuego. Ambos hechos perpetrados con fecha 20 de enero de 2022.

En contra de dicha decisión, la defensa del acusado interpuso recurso de nulidad, el que fue conocido en la audiencia pública celebrada el día viernes seis de septiembre último, conforme a la certificación estampada.

**Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que el recurso de nulidad entablado por la defensa del acusado, se fundó en dos causales, una de carácter principal y la otra subsidiaria.

La primera de ellas, es la del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, con relación con el artículo 19 N° 3 incisos 5 y N° 7 letras b) y c), artículo 7 números 2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Expresa que se infringió la referida normativa, por cuanto el procedimiento se inició por una denuncia de carácter anónima, respecto de la cual no se dejó registro alguno. Ello fue lo que motivó que los funcionarios



policiales se acercaran a su representado y le practicarán un control de identidad, al haber, supuestamente, oído un disparo y haberlo sorprendido manipulando un arma.

Sostiene que a raíz del actuar ilegal, la prueba obtenida en dicho procedimiento no puede ser incorporada en juicio.

Conforme a lo anterior, pide anular el juicio oral y la sentencia, ordenando la realización de un nuevo juicio oral ante un tribunal no inhabilitado y en tal juicio oral se debe excluir la prueba contaminada, es decir, las NUE N°6346338 y 6346336, y todos los informes y evaluaciones que de ellas deriven.

En subsidio, invocó la causal de nulidad prevista en la letra e) del artículo 374, en relación con el artículo 342 letra c), ambos del Código Procesal Penal y denuncia, en concreto, la infracción de las reglas de la sana crítica al momento de valorar la prueba rendida, en lo que dice relación con: el establecimiento de una supuesta manipulación del arma por parte del acusado, ya que los funcionarios policiales dieron versiones insustanciales sobre dicho punto, indicando sólo uno de ellos, que advirtió la manipulación del arma, cuando era guardada en la guantera, lo que no resulta plausible, ya que la propia guantera impediría observar lo que se manipulaba. Junto a lo anterior, denuncia que no se valora la declaración de los testigos de descargo, los que dan cuenta de una dinámica diversa a la sostenida por la acusadora, pero consistente con lo indicado por el imputado.

Luego, en cuanto al delito de tráfico, señala que el tribunal del grado establece que si el acusado guardaba algo en la guantera, necesariamente sabía lo que había en el interior de dicho habitáculo, debiendo responder penalmente, a título de guarda, posesión o transporte, de las especies



encontradas en el interior de aquel espacio, lo que correspondía -junto con el arma- a drogas.

Pide que se proceda a anular la referida sentencia definitiva y el juicio oral, y se disponga la realización de un nuevo juicio por el tribunal no inhabilitado que corresponda.

**SEGUNDO:** Que los hechos que se han tenido por establecidos por los sentenciadores del grado, los que fueron calificados jurídicamente como porte o tenencia ilegal de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 9 en relación con el artículo 2 letra b) de la Ley 17.798; tráfico ilícito de drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas en pequeñas cantidades, previsto y sancionado en el artículo 4° en relación al artículo 1° de la Ley 20.000, se encuentran contenidos en la motivación novena, al siguiente tenor: *“En horas de la tarde del día 20 de enero de 2022, funcionarios policiales que patrullaban en la población San Gregorio, en la comuna de La Granja, fueron alertados por un tercero que tres sujetos que se encontraban al interior de un vehículo marca Chevrolet, de color azul, efectuaban disparos en la vía pública. Tras reanudar el patrullaje los policías escucharon un disparo proveniente desde la vía pública y en las cercanías, observando que en pasaje Tres Oriente frente al número 8230 se encontraba estacionado el vehículo marca Chevrolet, de color azul, placa patente HCHZ 45, en su interior permanecía **Kevin Edgar Olivares Reyes** y otros dos sujetos. Olivares Reyes fue observado en la acción precisa de ocultar en la guantera de dicho vehículo un arma de fuego, confirmando a la revisión del automóvil que en la guantera de este permanecía una pistola marca Sig Sauer, modelo P 230, número de serie S110224 de 9x17 milímetros, y el cargador con 7 cartuchos sin percutir calibre .380 auto o 9x17 milímetros, además de una bolsa contenedora de cocaína clorhidrato, una segunda bolsa*



*contenedora a su vez de 22 bolsas contenedoras de cocaína clorhidrato, todas con un peso neto de 25,9 gramos, 14 bolsas contenedoras de cannabis sativa, con un peso neto de 10,5 gramos, 19 bolsas contenedoras de ketamina o Tussi, con un peso neto de 7,5 gramos, y dinero en efectivo. Especies que poseía, tenía, guardaba o transportaba sin contar con las autorizaciones de la autoridad competente.”*

**TERCERO:** Que para desestimar las alegaciones planteadas por la defensa en el motivo principal de su arbitrio, los juzgadores de la instancia, en el considerando duodécimo del fallo en revisión, argumentaron: *“La primera la plantea en razón que, en su parecer, se vulneró por parte del personal policial, las normas legales relativas al control o fiscalización y detención del imputado, al no contar con algún indicio que diera cuenta que su representado haya participado de algún ilícito, contando solo con una denuncia anónima desprovista de mayores antecedentes, lo cual tornaba en ilegal la detención y, consecuentemente, solicita no valorar la prueba que se origina a consecuencia de esta ilicitud.*

*Estos magistrados no comparten lo sostenido por la Defensa, por el contrario, no se avizoró infracción al debido proceso. Como primera consideración, los efectivos policiales Martínez y Astorga dieron cuenta que mientras se encontraban en funciones junto al comisario Pinto y el subcomisario Valdivieso, específicamente realizando patrullajes en la calle Padre Juan Meyer, población San Gregorio, en la comuna de La Granja, recibieron de una transeúnte la información de que tres individuos a bordo de un vehículo marca Chevrolet, de color azul, se encontraban realizando disparos en la vía pública. En el contexto de las acciones preventivas propias de su labor policial, no es cuestionable que, ante el aviso de la eventual*



*comisión de un ilícito, los agentes continuaran con sus acciones de patrullaje considerando el reporte dado por la particular. De igual forma, la falta de información sobre su identidad se justifica si se considera que, se les contacta en la vía pública donde se efectuaban los disparos, en horas de la tarde-noche y mientras patrullaban a bordo de un vehículo, portando chalecos antibalas con logo institucional. Así las cosas, el reporte que proporciona esta transeúnte no es propiamente una denuncia anónima, como alega la defensa, sino que más bien, una alerta para la función policial, pues como se ha dicho, se encontraban precisamente desarrollando acciones preventivas.*

*Siguiendo con el análisis del procedimiento, de los testimonios antes reseñados quedó acreditado que tras proseguir con el patrullaje son los propios policías los que al llegar al intersección de calle Padre Juan Meyer con Pasaje Tres Oriente escuchan un disparo de muy cerca, según explicó el inspector Astorga, al observar de donde pudo provenir el tiro, ven de frente a ellos, por pasaje Tres Oriente, precisamente, al vehículo marca Chevrolet, color azul, con tres sujetos en su interior, se posicionan frontalmente al móvil, descienden y se identifican como funcionarios policiales, instante en que dos de los tres sujetos bajan del auto e intentan huir, en tanto el tercero permaneció sentado en el asiento del copiloto con la puerta cerrada. Respecto de este individuo el inspector Astorga afirmó que lo observó directamente como éste guardaba un arma de fuego en la guantera, apreciación corroborada por el funcionario Martínez, pues según explicó vio como este manipulaba algo con sus manos mirando hacia abajo - visualización que, por lo demás, es factible si se tiene presente que se toparon de frente con el vehículo Chevrolet azul, y se posicionaron en la zona frontal del mismo a pocos metros de distancia, conforme fue explicado por los policías -, quedando habilitados para hacer*



*descender y registrar a sus ocupantes, pues se encontraban en la hipótesis de flagrancia a que alude el artículo 85 del Código Procesal Penal.*

*Luego, al control y revisión del auto, efectivamente, fue encontrada un arma de fuego tipo pistola con siete cartuchos balísticos en su interior, además de una considerable cantidad de sustancia ilícita de diversa naturaleza, a saber, cocaína clorhidrato, ketamina y marihuana, además de dinero en efectivo (\$43.000). Por consiguiente, y habiéndose detectado la existencia de una flagrante infracción a la Ley 20.000 y a la Ley 17.798, la actuación de los funcionarios policiales que intervinieron no puede ser objeto de reproche alguno, puesto que actuaron dentro de las hipótesis contenidas en los artículos 129 y 130 letra a) del Código Procesal Penal, para la represión de un delito que se estaba ejecutando en ese momento.*

*Asimismo, el control de identidad debe enfocarse a la existencia de un supuesto fáctico o algún indicio que lo justifique. En el caso resulta claro dicho antecedente, pues son los propios policías los que efectuando su labor de patrullaje por calle Padre Juan Meyer en la población San Gregorio, escuchan muy cerca del móvil en el que se desplazaban un disparo en la vía pública, luego observan que en el sector que ellos estiman provino el tiro, se encontraba estacionado un vehículo con las características dadas por la transeúnte que momentos previos los alertara de la misma situación que ellos percibieron, esto es, disparos en la vía pública, es más, en el interior de ese móvil coincidentemente habían tres ocupantes, tal como lo informó la mujer adulta que los previno. El indicio se verifica con el antecedente que los propios policías verifican en su patrullaje, esto es, el disparo en la vía pública desde el sector donde permanecía un automóvil Chevrolet azul con tres sujetos en su interior, - circunstancia que les obligaba a proceder conforme a la normativa*



*legal les impone -, no de una denuncia anónima, que como se dijo, en el presente caso no reviste tal carácter la información que una mujer adulta dio a los funcionarios, sino más bien es una alerta a la función policial, que, en efecto, los propios efectivos verificaron con el disparo que escucharon, a lo que siguió el hallazgo del móvil con tres sujetos en su interior, dos de los cuales intentan huir del actuar policial, y la manipulación del encausado de un arma de fuego, al tratar de ocultarla, observada directamente por los efectivos.*

*Sobre la base de las circunstancias fácticas antes reseñadas, se debe concluir que aquéllas conforman un indicio suficiente que habilitaba a los policías para realizar el control de identidad y posterior registro, teniendo en consideración que, como el mismo artículo 85 del Código Procesal Penal prescribe, esa actuación debe ser el resultado de una “estimación” que debe realizar el propio policía “según las circunstancias”. Estima el tribunal que el presente caso el equipo policial estaba suficientemente habilitado para efectuar un control de identidad, existía un claro indicio que estas personas pudiesen portar o tener un arma de fuego, indicio que, en la experiencia policial, merecía ser controlado y, luego, tal como establece el mismo artículo 85, era perfectamente posible proceder a su fiscalización y registro de las vestimentas. Es en el marco de esta actividad que los efectivos policiales descubren que efectivamente el acusado portaba o tenía en su poder un arma de fuego, observando, derechamente, que la ocultaba en la guantera del automóvil en el que permanecía, luego, en dicho compartimento encuentran el arma de fuego tipo pistola que segundos antes lo vieron guardar en aquel lugar, compartimento en el que, además, fue habida droga de diversa naturaleza, produciéndose, la detección de un delito en situación de flagrancia, por lo cual, desde luego, y tal como prosigue el artículo 85 en comento, era factible detener*



*al sujeto que, sin necesidad de una orden previa, por cuanto en ese momento, ejecutaba algunas de las acciones ilícitas que previene la ley 17.798 y la ley 20.000, que se encontraba, por tanto, en la situación de flagrancia descrita en la letra a) del artículo 130 del Código Procesal Penal. Siendo procedente la detención de un individuo que se encuentra cometiendo un delito, la posibilidad de incautar los efectos del mismo ya ni siquiera es una facultad, sino que una obligación para los funcionarios, tal como se desprende de lo preceptuado en el artículo 83 del citado Código.*

*En consecuencia, en concepto de estos sentenciadores, estamos en presencia de una actuación policial y control de identidad efectuado con la objetividad necesaria y con diversos indicios para validar la diligencia, de modo que el procedimiento se ajustó a derecho, sin que infringiera el debido proceso, el deber de registro, no viéndose afectadas las actuaciones posteriores, dándose en la especie las hipótesis de flagrancia contempladas en el artículo 130 del Código Procesal Penal, con lo que este Tribunal no vislumbra la vulneración sustentada, razón que llevó a realizar la ponderación de las pruebas de acuerdo a su convicción, las que derivan de un control de identidad efectuado dentro de los términos del artículo 85 del Código Procesal Penal.”*

**CUARTO:** Que, en lo concerniente a la infracción denunciada por el recurso de nulidad deducido por la defensa, cabe indicar que el debido proceso es un derecho asegurado por la Constitución Política de la República y que consiste en que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y al efecto, el artículo 19, N° 3, inciso sexto, confiere al legislador la misión de definir las garantías de un procedimiento racional y justo. Sobre los presupuestos básicos que tal garantía supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituyen a lo menos un





conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Chile que están en vigor y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas.

**QUINTO:** Que, de otro lado, en cuanto a las facultades autónomas de actuación que la ley le entrega al personal policial, así como lo referido al respeto del debido proceso y la intimidad, esta Corte Suprema ha señalado reiteradamente que la negativa a admitir prueba ilícita, tiene como fundamento la concepción del proceso como instrumento de resolución jurisdiccional de litigios dentro del ordenamiento jurídico, lo que conduce a que todo acto que infrinja de manera sustancial dicho sistema, debe ser excluido del mismo.

**SEXTO:** Que en relación a las normas de procedimiento aplicables al caso concreto, resulta necesario proceder a su análisis a efectos de poder determinar si ellas han sido transgredidas y, en su caso, examinar si dicho quebrantamiento ha significado la vulneración de los derechos fundamentales del acusado, como denunció su defensa.

**SÉPTIMO:** Que, como se ha consignado en ocasiones anteriores por esta Corte, el Código Procesal Penal regula a lo largo de su normativa, las funciones de la policía en relación con la investigación de hechos punibles y le entrega un cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación. Tal regulación, en todo caso, contempla como regla general que su actuación se encuentra sujeta a la dirección y responsabilidad de los representantes del Ministerio Público o de los jueces (*Sentencias Corte*



*Suprema Roles N° 7178-17, de 13 de abril de 2017; N° 9167-17, de 27 de abril de 2017; N° 20286-18, de 01 de octubre de 2018; N° 28.126-18, de 13 de diciembre de 2018 y N° 13.881-19, de 25 de julio de 2019).*

Es así como el artículo 83 del citado cuerpo normativo, establece expresamente el marco regulatorio de la actuación policial sin orden previa o instrucción particular de los fiscales permitiendo su gestión autónoma para prestar auxilio a la víctima (letra a); practicar la detención en casos de flagrancia conforme a la ley (letra b); resguardar el sitio del suceso con el objeto de facilitar la intervención de personal experto de la policía, impedir la alteración o eliminación de rastros o vestigios del hecho, etcétera,(letra c); identificar testigos y consignar las declaraciones que ellos presten voluntariamente, tratándose de los casos de las letras b) y c) citadas (letra d); recibir las denuncias del público (letra e) y efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales (letra f). Sólo en las condiciones que establece la letra c) recién citada, el legislador autoriza a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile a efectuar diligencias autónomas de investigación.

A su vez, los artículos 85 y 86 del Código Procesal Penal, regulan el procedimiento de control de identidad, estableciendo la facultad de los funcionarios policiales para solicitar la identificación de cualquier persona sin orden previa de los fiscales, en los casos fundados en que estimen que exista algún indicio de que se hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; en el caso que la persona se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad; facultando para el registro de vestimentas,



equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, procediendo a su detención, sin necesidad de orden judicial, de quienes se sorprenda a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130 *-que describe lo que debe entenderse por situación de flagrancia-* así como de quienes, al momento del cotejo, registren orden de aprehensión pendiente.

**OCTAVO:** Que las disposiciones recién reseñadas tratan, entonces, de conciliar una efectiva persecución y pesquisa de los delitos con los derechos y garantías de los ciudadanos, estableciéndose en forma general la actuación subordinada de los entes encargados de la ejecución material de las órdenes de indagación y aseguramiento de evidencias y sujetos de investigación al órgano establecido por ley de la referida tarea, los que a su vez actúan conforme a un estatuto no menos regulado *-y sometido a control jurisdiccional-* en lo referido a las medidas que afecten los derechos constitucionalmente protegidos de los ciudadanos.

**NOVENO:** Que a fin de dirimir lo planteado en el recurso, resulta necesario estarse a lo asentado por los jueces del fondo al ponderar las evidencias aportadas a la litis, sin que sea dable que, para tales efectos, esta Corte Suprema, con ocasión del estudio de la causal de nulidad propuesta, intente una nueva valoración de esas probanzas y fije hechos distintos a los determinados por el tribunal del grado, porque ello quebranta de manera evidente las máximas de oralidad, inmediación y bilateralidad de la audiencia, que rigen la incorporación y valoración de la prueba en este sistema procesal penal. Aclarado lo anterior, se procederá al estudio de las protestas fundantes del recurso con arreglo a los hechos que en la decisión se tienen por demostrados.



**DÉCIMO:** Que, de la lectura del considerando noveno de la sentencia en revisión, referido previamente, el tribunal da por establecidos la existencia de una denuncia anónima, realizada por una transeúnte a funcionarios policiales que se encontraban patrullando, comunicación en la que se describía que desde el interior de un vehículo y en el que se transportaban tres sujetos, se efectuaban disparos, caracterizando al móvil por marca y color. Acto seguido, los funcionarios policiales que recibieron la comunicación de parte de este tercero, oyeron un disparo, advirtiendo en las inmediaciones a un vehículo coincidente con la descripción brindada previamente por la transeúnte, vehículo al que al momento de acercarse, dos de los tres ocupantes intentaron frustradamente darse a la fuga, mientras que el tercer ocupante, el acusado Olivares Reyes, permaneció en el vehículo, específicamente en el asiento del copiloto manipulando un arma de fuego, la que escondió en la guantera, donde además se halló un cargador y droga, lo que motivó su detención.

De lo anterior, ya aparece que el actuar de funcionarios policiales se ajustó a derecho, toda vez que atendida la comunicación efectuada por la transeúnte, unido a lo percibido directamente por los funcionarios policiales, que corroboraba la información aportada previamente en un tiempo inmediato, no tan sólo referida a la descripción del vehículo sino que también al número de ocupantes y a la conducta que se le atribuía a quienes se trasladaban en el mismo, lo que habilitaba el actuar de los funcionarios policiales para realizar un control a los ocupantes del vehículo.

**UNDÉCIMO:** Que, resulta relevante adicionar a lo anterior, el hecho que al momento de acercarse al lugar, justificadamente, los funcionarios policiales pudieron advertir que el sujeto que se encontraba en el asiento del copiloto manipulaba un elemento que guardó en la guantera, elemento que el Inspector



Astorga logra identificar como un arma de fuego, cuestión que viene a ratificar la procedencia del control de identidad, con independencia del resultado final de la intervención.

**DUODÉCIMO:** Que, en la especie, la defensa del acusado Olivares Reyes ha cuestionado el actuar de los funcionarios policiales, toda vez que estima que al practicarse un control de identidad fundado en una denuncia anónima, no reviste los caracteres de seriedad y verosimilitud exigidos, razón por la que funcionarios policiales actuaron de manera autónoma en un caso no previsto por la ley, lo que implica que todas las pruebas derivadas de tales diligencias son ilícitas, y por ende, debieron ser valoradas negativamente por los juzgadores del fondo.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, al efecto y como se ha resuelto reiteradamente por esta Corte, entre otros, en los pronunciamientos Rol N° 35.167-17, de 23 de agosto de 2017, y Rol N° 41.165-2019, de 06 de febrero de 2020, es preciso señalar que lo informado mediante una denuncia anónima puede constituir un antecedente que permite construir un indicio de la comisión de un delito, siempre que esté revestida de seriedad y verosimilitud, rasgos que se observan en la especie, dada la sindicación de la conducta que se estaba desplegando por los ocupantes del móvil, así como de la ubicación en que ellos se encontraban. Cuestión que luego, es ratificada por los propios sentidos de los funcionarios policiales, sumando otro elemento que le da mayor verosimilitud a los antecedentes expuestos en la comunicación anónima.

**DÉCIMO CUARTO:** Que, en el mismo sentido, se ha declarado por este Tribunal, por ejemplo en Rol N° 8335-2019, de 04 de junio de 2019, más allá de expresar si esta Corte comparte o no la apreciación de los policías de que la situación de autos ameritaba controlar la identidad del acusado, desde que no



se trata aquí de un examen de segunda instancia sobre la determinación de esos agentes, lo relevante y capital es que el fallo da por ciertas circunstancias que objetivamente y de manera plausible, a un tercero observador imparcial, permitían construir un indicio de aquellos a que alude el artículo 85 del Código Procesal Penal, lo que lleva a descartar la arbitrariedad, abuso o sesgo en el actuar policial, por lo que los jueces del tribunal oral no incurrieron en vicio alguno al aceptar con carácter de lícita la prueba de cargo obtenida por la policía en las referidas circunstancias y que fuera aportada al juicio por el Ministerio Público.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, en suma, la actividad policial ha sido desplegada dentro de los márgenes que la ley le confiere, de manera que no se aprecia inobservancia de las normas que el legislador consignó para un procedimiento como el de la especie, con lo que ciertamente no se afectaron las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, y, por consiguiente, el motivo de nulidad en estudio no puede prosperar.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, como causal subsidiaria de nulidad, la defensa del sentenciado Olivares Reyes, invocó aquella contenida en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 342 letra c), y 297 del mismo texto legal.

Asevera que, la sentencia carece de la debida fundamentación para acreditar la manipulación del arma de fuego y la conducta típica del artículo 4 Ley N° 20.000.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, de la sola lectura de los sustentos de la causal en estudio, es posible colegir que a través de su reclamo, lo que se denuncia, es la falta de satisfacción con lo resuelto, más no, la inexistencia de *“La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y*



*circunstancias que se dieran por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dicha conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”, como contempla la letra c) del artículo 342 del Código Procesal Penal.*

Así, y en cuanto a la manipulación del arma de fuego, el fallo impugnado indica en su motivación octava, lo visto por cada funcionario policial desde la posición en la que se encontraban, dichos que son coincidentes en indicar que el sujeto que permaneció en el asiento del copiloto manipulaba un elemento que guardó en la guantera, siendo uno de dichos funcionarios policiales capaz de identificar que dicho elemento se trataba de un arma de fuego, lo que fue corroborado por el hallazgo posterior del arma, lo que desestima la versión allegada por los testigos presentados por la defensa.

Luego, el recurso no identifica cuál es la vulneración a la sana crítica que se advierte en la conclusión fáctica expuesta previamente, limitándose a expresar una opinión diversa sobre dicha situación, lo que impide tener por acreditada la causal que se invoca.

Del mismo modo y teniendo presente lo ya expuesto, en lo referente a la conducta del artículo 4 de la Ley 20.000, resulta de esta alegación, además, que lo pretendido es revertir una calificación jurídica no compartida por la defensa, sin que resulte acreditado la existencia del vicio que se denuncia, a lo que debe sumarse que en el fundamento noveno del fallo impugnado –el que fue antes transcrito– los sentenciadores del grado expusieron de manera detallada la conducta atribuida al acusado, consistente en que éste fue sorprendido poseyendo, teniendo o guardando, junto a una pistola y a un cargador, *“una bolsa contenedora de cocaína clorhidrato, una segunda bolsa contenedora a su vez de 22 bolsas contenedoras de cocaína clorhidrato, todas*



*con un peso neto de 25,9 gramos, 14 bolsas contenedoras de cannabis sativa, con un peso neto de 10,5 gramos, 19 bolsas contenedoras de ketamina o Tussi, con un peso neto de 7,5 gramos, y dinero en efectivo”, conducta que correctamente configura un ilícito de tráfico del artículo 4 de la Ley 20.000, como lo fue calificado por el a quo, todo lo que necesariamente conduce a desestimar la protesta de la defensa, en cuanto la misma carece de todo sustento.*

**DÉCIMO OCTAVO:** Que, en consecuencia, al no haberse configurado ninguna de las hipótesis de nulidad invocadas por la defensa del acusado Olivares Reyes, el presente arbitrio en análisis será desestimado en todos sus extremos.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 373 letras a) y b) y 384 del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA** el recurso de nulidad deducido por la defensa del acusado **Kevin Edgar Olivares Reyes**, en contra de la sentencia de tres de julio de dos mil veinticuatro, dictada por el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, y del juicio oral que le antecedió en el proceso **RUC 2200070331-5, RIT N° 514-2024**, los que, por consiguiente, no son nulos.

**Se previene que el Ministro Sr. Llanos** concurre al rechazo del recurso respecto de ambas causales de nulidad esgrimidas para la defensa, pero no comparte los razonamientos décimo, décimo tercero y décimo cuarto de la sentencia que antecede, teniendo para ello presente:

1.- Que los jueces de la instancia establecieron como hechos que funcionarios policiales que patrullaban en la población San Gregorio oyeron un disparo, advirtiendo en las inmediaciones a un vehículo del que, al momento de acercarse, dos de los tres ocupantes se bajaron e intentaron frustradamente





darse a la fuga, mientras que el tercer ocupante, el acusado Olivares Reyes, permaneció en el vehículo manipulando un arma de fuego, la que escondió en la guantera, donde además se encontró un cargador y droga, lo que motivó su detención;

2.- Que si bien los juzgadores del fondo establecen, asimismo, que previamente fueron “alertados” por un tercero en cuanto a que los ocupantes de dicho vehículo efectuaban disparos en la vía pública, no otorgan a tal “alerta” la calidad de una “denuncia anónima”, la que, como ha sido declarado por esta Corte, para que constituya un indicio suficiente para un control de identidad investigativo (que prevé el artículo 85 del Código Procesal Penal) debe proporcionar datos certeros que objetivamente respalden el hecho delictivo de que dan cuenta (entre otros, STC Rol N° 30.582-2020), carácter que no tenía, en cambio, la aludida “alerta”;

3.- Que en cambio, los demás hechos que percibieron los policías aprehensores por sus propios sentidos (oír un disparo, ver que unos sujetos huían de un vehículo apostado en las inmediaciones y que un tercer ocupante de este manipulaba un arma de fuego que intentó ocultar), constituyen evidentemente elementos que, en su conjunto, no pueden sino ser constitutivos de un indicio de que se estaba cometiendo un delito (porte o tenencia de armas de fuego y disparos en la vía pública) que habilitaban legalmente para el registro del aludido vehículo, encontrándose en el mismo armas y sustancias ilícitas. Luego, se procedió legalmente a la detención e incautación tanto del arma como de tales sustancias, por encontrarse en la hipótesis de flagrancia a que aluden los artículos 129 y 130 del citado estatuto procesal penal, resultando inconcuso que el proceder policial que se impugna no adoleció de ilicitud y por lo tanto no es vulneratorio de derecho constitucional alguno.



Redacción del fallo a cargo de la ministra (s) Sra. María Carolina Catepillán Lobos, y de la prevención, por su autor.

Regístrese y devuélvase.

**Rol N°28404-2024**

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por el Ministro Sr. Leopoldo Llanos S., las Ministras Suplentes Sra. Dobra Lusic N., Sra. María Carolina Catepillán L., y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavolari G., y Sr. Raúl Fuentes M. No firma el Ministro Sr. Llanos y la Ministra Suplente Sra. Catepillán, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios y por haber concluido su período de suplencia, respectivamente.



En Santiago, a veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

